

actualización

UNHCR/Result Refugee Service

La frágil paz de Sri Lanka

por Nicholas Van Hear

En febrero de 2003, los habitantes de Sri Lanka, cumplieron un año desde el cese al fuego entre las fuerzas armadas del gobierno de ese país y los Tigres de la Liberación de Tamil Eelam (LTTE, por sus siglas en inglés). Aunque las tensiones han permanecido, el proceso de paz en marcha desde principios de 2002, ha transformado la atmósfera en el país y ha levantado el temor fatalista y opresor que ha malogrado a mucha de la población de Sri Lanka, alrededor de 19 millones, por cerca de 20 años de conflicto. Ahora, las personas en áreas de conflicto del norte y este, son capaces de llevar su vida diaria con un mayor grado de normalidad, algo que por mucho tiempo no pudieron hacer, sin que la remoción de las omnipresentes estaciones de chequeo, y la mayor movilidad que ha resultado posible, sea lo menos importante.

Lo que las agencias han etiquetado sin elegancia como fase "postconflicto, pre-paz", ha originado el prospecto del retorno de los desplazados internos y eventualmente de aquellos que han buscado refugio en el exterior. Con base en los registros locales del Gobierno, se estima que unas 240 mil personas desplazadas han retornado a sus distritos de origen (aunque no necesariamente a sus hogares), desde que el proceso de paz se llevó a cabo. Esta cifra no captura el número sustancial de personas que han mantenido registro (y recibo de las raciones gubernamentales) en su lugar de desplazamiento, sino que han vuelto a sus lugares de origen para ver si pueden reclamar sus casas y tierra y restablecer una vida ahí. Muchas personas, desplazados y refugiados, están adoptando una postura de "esperar y ver" antes de hacer un compromiso de retorno permanente. Hasta que la paz se establezca con más firmeza y las condiciones en casa sean más seguras, ACNUR no está alentando el retorno de refugiados de Tamil Nadu al sur de la India, donde el número de desplazados internos asciende entre 100 a 120 mil, en donde cerca de dos tercios viven en aproximadamente 100 campos en el estado. Unos pocos miles, sin embargo, han retornado principalmente a los distritos de Mannar y Jaffna.

Estos movimientos de retorno no se han dado sin problemas. En particular, se están suscitando problemas de propiedad a medida que los retornados tratan de reclamar sus tierras y viviendas, ocupadas por otras personas desplazadas que no tienen a donde ir, debido a que su propia tierra o vivienda está dañada o destruida, ocupada por otros, en áreas profusamente minadas u ocupadas por el Ejército. En respuesta a la nueva situación, ACNUR y otras agencias han reforzado sus operaciones para brindar asistencia a los desplazados. Si bien aún queda bastante espacio para mejorar las estructuras organizacionales del régimen humanitario, incluyendo al Gobierno que opera un sistema de ración imperfecto para los desplazados, funciona bastante bien en Sri Lanka. Con suerte, estos esfuerzos serán respaldados por el patrocinio donante para asegurar la paz duradera en los años venideros, aunque las lecciones de cualquier otro lugar, notablemente Afganistán, no son alentadoras a este respecto, por no mencionar las implicaciones de la guerra con Irak. Una conferencia mayor de donantes está planeada para junio en Japón.

Los retos verdaderos permanecen no en el cambio organizacional -más "coordinación"- sino en la economía política internacional, regional y local. Como lo han hecho en cualquier otro lugar en las sociedades postconflicto, el Banco Mundial, otras agencias y donantes intentarán nombrar a las agencias humanitarias para que modelen la Sri Lanka postconflicto, bajo un molde neoliberal. La asistencia donante para las necesidades inmediatas de reconstrucción, ya se está haciendo condicional en tal amoldamiento, a través de la reforma de los sistemas legales y de derechos de propiedad, por ejemplo. La influencia que los donantes tendrán como resultado de la creciente deuda (en gran medida militar) en los años venideros también será sustancial. Si bien se podría garantizar tal "ajuste", los filántropos necesitarán ser cautelosos de las determinaciones que se tomen y estar listos para disputar los excesos de tal influencia, si la transición a la paz se consolida y los refugiados y desplazados son facultados para reconstruir sus vidas.

Nicholas Van Hear es uno de los investigadores principales del

Instituto para Estudios Internacionales en Copenhague.
Correo electrónico: nvh@cdr.dk

Angola: ¿de los planes a la acción?

por Cecilie Winther, DanChurchAid,
y Nina M. Birkeland, Universidad
Nord Trøndelag

En el número 16 de Forced Migration Review, Kamia Carvalho, en su artículo sobre la protección a los desplazados internos en Angola, concluye en que: "Pese al buen inicio, Angola aún tiene un largo camino por recorrer" en cuanto a la implementación de los Principios Guía. Desde entonces, el número oficial de desplazados internos ha disminuido de 4.1 a 2.8 millones. Inmediatamente después de los acuerdos de paz firmados en abril de 2002, la gente comenzó a mudarse lejos de los lugares de refugio. Sin embargo, de forma simultánea, quienes no habían podido huir de las áreas ocupadas, migraron a áreas con frecuencia las capitales de la provincia donde esperaban recibir ayuda y por lo tanto, incrementaron las estadísticas de desplazados internos. Y es cuestionable si los 1.3 millones que con anterioridad se contaban en las estadísticas oficiales, de hecho, se han establecido de vuelta en sus hogares o en nuevos lugares de residencia, en cumplimiento de sus derechos tal como está descrito en los Principios Guía.

Las autoridades angoleñas reclaman que parte de la reducción del número de desplazados internos es el resultado del retorno espontáneo. Sin embargo, la información proveniente de las áreas afectadas sugiere que no todo el retorno "espontáneo" era voluntario. Y en áreas donde de hecho el retorno ha sido en buena medida voluntario, los desplazados internos que retornan se encuentran con que no hay infraestructura básica, que un significativo número de minas anti-personales aún existen y que no hay recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas.

El gobierno angoleño ha integrado los Principios Guía a la legislación nacional y el 5 de enero de 2001, adoptó las Normas Nacionales para



Reasentamiento de las Poblaciones Desplazadas. Las Normas deben garantizar estándares mínimos para un retorno seguro, voluntario y sostenible. Los Planes Provinciales de la Acción de Emergencia para el Reasentamiento y Retorno, fueron suscritos por el Gobierno y la comunidad humanitaria, de acuerdo con las Normas en junio de 2002. Estos fueron planes completos que delineaban las necesidades de ayuda, rehabilitación y reconstrucción que han servido como guías para los actores humanitarios en el país. En la realidad, el Gobierno ha concentrado sus limitados fondos en la rehabilitación de infraestructura más que en servicios sociales y de asistencia inmediata. Una vez más, se ha dejado en manos de la comunidad humanitaria, la enorme tarea de encargarse de la supervivencia básica de los desplazados. Con la continua falta de fondos, los actores humanitarios obviamente no han sido capaces de cubrir todas las necesidades, pero se han visto forzados a priorizar entre poblaciones intensamente vulnerables. Pese a las buenas intenciones, las Normas aún no han pasado del papel a la realidad. Las autoridades angoleñas son buenas para producir planes y escribir documentos que llenen los requisitos de los donantes internacionales y de la ONU, pero su implementación y uso están lejos de ser ejemplares.

1. Proyecto Global IDP: www.idpproject.org

Responsabilidad humanitaria

por Asmita Naik

En una conferencia sobre 'Responsabilidad y operaciones humanitarias: direcciones presentes y futuras', realizada en Copenhague en febrero de 2003, convocada por la Oficina Danesa de Asistencia al Desarrollo Internacional (DANIDA por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Responsabilidad Humanitaria (HAP por sus siglas en inglés), se lanzó una nueva organización reguladora de las actividades de organizaciones humanitarias.

El debate sobre la responsabilidad humanitaria, inició luego de la inter-

vención humanitaria posterior al genocidio en Ruanda. Una evaluación del esfuerzo de ayuda criticó su "pobre coordinación" y su "rivalidad lamentable", que resultaron en la "duplicación y desperdicio de recursos" y aún más, en una "pérdida innecesaria de vidas". La intervención en Kosovo recibió críticas similares. Más recientemente, el escándalo del año pasado por la explotación sexual de los refugiados por parte de trabajadores humanitarios y de las fuerzas de paz en África Occidental, se convirtió en una vertiente para el debate sobre responsabilidad humanitaria. De acuerdo con Agnes Callamard, Directora del HAP, "África Occidental atrajo la atención de todos hacia el problema. Anteriormente, algunas organizaciones percibían que la responsabilidad hacia poblaciones afectadas por crisis era una prioridad leve ... el escrutinio acentuado de los medios hizo que las agencias comprendieran la importancia de poder asignar responsabilidades a cada quien."

Después de la crisis de Ruanda, la idea de un observador humanitario -- como un monitor e investigador imparcial -- se hizo obsoleta. Varias iniciativas se desarrollaron, incluyendo las HAP, Gente que Ayuda (People in Aid), Red Activa de Aprendizaje de Responsabilidad y Rendimiento en la Acción Humanitaria (ALNAP por sus siglas en inglés) y el Proyecto Esfera (Sphere Project). El programa de investigación recientemente concluido por el HAP, descubrió "evidencia de la falta de mecanismos para asignar responsabilidad, además de falta de comprensión de la responsabilidad, pero ... un compromiso real y un deseo de hacer las cosas mejor".

La nueva organización -- supuestamente sucesora del HAP -- será un cuerpo autoregulado con un mandato de proveer apoyo técnico. Aunque este es un desarrollo muy esperado, algunos cuestionan si va lo suficientemente lejos.

Se ha cuestionado cómo se traducirá la responsabilidad de forma real a nivel nacional y cuáles serán los mecanismos para esto. Puesto que la

membresía a la nueva organización es voluntaria, la gran mayoría de ONG, agencias de la ONU y gubernamentales permanecerán sin regulación. "Los donantes necesitan usar el poder del bolsillo para lograr una mayor responsabilidad hacia los beneficiarios," afirma Ken Guinta de la Organización Interaction, una red de 160 ONG estadounidenses. Vincent Cochetel de ACNUR, remarcó que "la principal brecha que perdura es la necesidad de mecanismos de reclamo efectivos. Aún después de la experiencia en África Occidental, tales mecanismos solo han sido instituidos en unos cuantos países. El miedo a la venganza y la falta de confidencialidad impiden a la gente que reclame." En la nueva organización, se hizo énfasis en la necesidad de transparencia. Brendon Gormley del Comité de Emergencia para Desastres (DEC) preguntó, "qué tan abiertos y honestos estamos preparados a ser...? Las discusiones sobre responsabilidad en la DEC sólo fueron genuinas cuando se acordó que las evaluaciones serían independientes y públicas..."

Las organizaciones humanitarias no siempre son las mejores para hablar en nombre de las víctimas. Tal como concluyó un observador, "pocas organizaciones hablaron en favor de las víctimas del escándalo de África Occidental. Incluso los que de hecho hablaron, no lo hicieron con el énfasis con el que lo habrían hecho las propias víctimas. La verdadera brecha permanece en la necesidad de un verdadero guardián que controle y asigne responsabilidades entre todos los actores humanitarios..."

Para acceder al texto completo de las presentaciones de la conferencia que se realizó en febrero de 2003, visite: www.hapgeneva.org/confprestns.htm